

Centro para la Integración y el Derecho Público

Fundado en enero de 2005, en la ciudad de Caracas, Venezuela, el Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP) es una sociedad civil dedicada al estudio del derecho público y los aspectos jurídicos de los procesos de integración regional.

El CIDEP desarrolla principalmente actividades de investigación y divulgación.

La Dirección General del CIDEP corresponde a Jorge Luis Suárez Mejías y la Dirección Ejecutiva a Antonio Silva Aranguren. La Subdirección recae en Samantha Sánchez Miralles.

AVISO LEGAL

Este archivo forma parte de la colección *Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela* que puede consultarse en <https://www.cidep.online/normativa1821-1922> donde también encontrará un índice por tomo que le permitirá descargar los actos individualmente.

La digitalización es una reproducción realizada por medios electrónicos por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y sujeta luego a un proceso de optimización y revisión manual por parte del CIDEP, con el objetivo de preservar la memoria jurídica venezolana y facilitar su acceso. Por tal motivo, le solicitamos no hacer un uso comercial del archivo y mantener sus atributos inalterados.

Este archivo cuenta con tecnología OCR (*optical character recognition*) que permite –entre otros– la búsqueda de términos, selección y copia de texto, así como la reducción del tamaño del archivo sin disminuir su calidad.

En caso de constatar algún error u omisión en el texto, le agradecemos informarlo a través del correo electrónico contacto@cidep.com.ve para proceder en consecuencia.

DIGITALIZADO POR

Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, Venezuela.

E-mail: academiadecienciaspoliticas@gmail.com

<https://www.acienpol.org.ve>

Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP). Caracas, Venezuela.

E-mail: contacto@cidep.com.ve

<http://cidep.com.ve> <http://cidep.online>



Artículo 43.

Cuando la pensión sea especial bastará citar el tomo de la Recopilación de Leyes, y la página en que esté impreso el Decreto que la otorgó o la *Gaceta Oficial*.

Artículo 44.

La Junta expedirá la cédula respectiva, ateniéndose a las disposiciones de esta ley, tanto en materia del monto de la pensión, como en materia de los que tienen derecho a disfrutarla.

Artículo 45.

Tanto las actuaciones como las copias y solicitudes se harán en papel común, pero con las estampillas de ley.

Artículo 46.

La Junta entregará al interesado la cédula de su pensión y lo participará al Ministerio respectivo, para que al presentarla el interesado tome nota de ella y con su visto-bueno la envíe al Ministerio de Hacienda para su pago.

Artículo 47.

El interesado presentará mensualmente al Ministro respectivo la lista para comprobar la supervivencia certificada por la Autoridad Civil del Municipio en que vive: este servicio se hará gratis. Con la lista y su recibo ocurrirá a la oficina de pago donde esté radicado el sueldo. Nadie puede firmar por un pensionado en los documentos de cobro de la pensión, salvo especial autorización del interesado.

TÍTULO VI

Disposición general.

Artículo 48.

En todos los casos de sucesión establecidos por esta ley, los nietos menores y las nietas solteras o viudas participarán de la pensión en concurrencia con sus tíos o tías, pero en estirpe.

Disposición final.

Artículo 49.

Se derogan las Leyes de 25 de junio de 1891, de 29 de mayo de 1894 y demás

Decretos y Resoluciones sobre la materia, anteriores a la presente Ley.

Dado en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los siete días del mes de agosto de mil novecientos nueve.— Año 100° de la Independencia y 51° de la Federación.

El Presidente del Congreso,
(L. S.)

DIEGO BTA. FERRER,

El Vicepresidente,

ALEJANDRO RIVAS VÁSQUEZ.

Los Secretarios,

J. L. Andara.

R. Blanco-Fombona.

Palacio Federal, en Caracas, a trece de agosto de mil novecientos nueve.— Año 100° de la Independencia y 51° de la Federación:

Ejecútese y cuídese de su ejecución,
(L. S.)

J. V. GOMEZ.

Refrendado.

El Ministro de Relaciones Interiores,
(L. S.)

F. L. ALCÁNTARA.

Refrendado.

El Ministro de Guerra y Marina,
(L. S.)

RÉGULO L. OLIVARES.

10.688

Ley de Tierras Baldías y Egidos de 13 de agosto de 1909.

EL CONGRESO

DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE VENEZUELA,

Decreta :

la siguiente

LEY DE TIERRAS BALDIAS Y EGIDOS

CAPÍTULO I

De las tierras baldías

Art. 1° Se consideran baldías las

tierras que estando dentro de los límites de la Nación no sean Egidos o hayan sido adquiridas legítimamente por particulares o personas jurídicas capaces de obtener propiedades en el País y las que reivindique la Nación conforme a la Ley.

Art. 2º El Ejecutivo Federal ordenará por medio del catastro de las tierras baldías, por medio del Intendente que se nombrará según el artículo 15, y al efecto, dictará las disposiciones y reglamentos que fueren necesarios.

Art. 3º El catastro se formará por Municipios y expresará:

1º Las tierras baldías que existan en cada uno de éstos.

2º Su orientación, indicando a qué viento y a qué distancia de la cabecera del Municipio están situadas.

3º Sus límites en caso de ser conocidos o que por tales se tengan.

4º Su apropiación expresando si son de agricultura o de cría.

§ 1º Siendo de agricultura, si son llanas o montañosas y que plantas se producen, determinando las diversas especies de maderas y de frutos que existan o que pueden cultivarse.

§ 2º Siendo de cría, cuáles son sus pastos y que clase de ganados pueden criarse en ellos.

5º Su estado y al efecto se determinará si están o no cultivadas o empleadas en algún uso público o privado.

§ Al estar cultivadas, que clase de cultivos y quiénes las labran.

6º Su población expresando si hay vecindarios o casas aisladas.

7º Sus cualidades, si son de riego o de secano, con expresión de si tienen ríos, caños o lagunas, el caudal de agua que tengan y si son permanentes o navegables por buques de remo, vela o vapor o por balzas.

8º Su temperatura, fertilidad, condiciones geográficas, higiénicas y demás circunstancias especiales de la localidad.

Art. 4º Los Presidentes de los Estados, Jefes Civiles de los Distritos y Municipios y demás autoridades civiles, están en la obligación de prestar al encargado de formar el catastro todo el apoyo necesario y suministrarle los datos y noticias que fueren necesarios con la mayor exactitud. Estas noticias se darán por escrito.

Art. 5º Los catastros de tierras baldías según los artículos que anteceden, se publicarán en la Memoria del Ministerio de Fomento.

Art. 6º Luego que se reciban en el Ministerio de Fomento los catastros antedichos, el Gobierno Nacional por órgano del mismo Ministerio declarará baldías aquellas tierras que resultaren serlo sin ningún género de duda conforme a esta Ley, y para la averiguación de aquellas respecto de las cuales haya duda, dispondrá que por el respectivo Intendente se promueva lo conveniente ante los Tribunales competentes.

Art. 7º Los denunciantes de tierras baldías que el Ejecutivo Federal reivindique en virtud de sentencia o conciliación, tienen derecho a que se les expida título de propiedad por la quinta parte del terreno adquirido.

§ La conciliación no será válida sin el consentimiento expreso del Gobierno del respectivo Estado.

Art. 8º El Ministro de Fomento a fin de no ordenar la iniciación de procesos contrarios al objeto de la presente Ley, consultará en cada caso al Gobierno del respectivo Estado y tendrá en consideración:

1º La autoridad de la prescripción, como causa legítima de dominio según el Código Civil.

2º Que es de interés general la estabilidad de las empresas agrícolas o pecuarias que estuvieren ya fundadas.

Art. 9º En todo caso se podrá facultar al Intendente para terminar por transacción, bajo condiciones equitativas, los juicios que se ordena promover, antes o después de intentada la demanda; según las instrucciones detalladas que se le comuniquen.

CAPÍTULO II

Administración y aplicación de las tierras baldías.

Art. 10. Las tierras baldías son patrimonio de los Estados, y su administración y enagenación corresponde al Ejecutivo Federal de conformidad con las reglas de la presente Ley y previo el informe favorable del Presidente del respectivo Estado, cuando se trata de enagenación en cualquiera forma.

Art. 11. Las tierras baldías podrán venderse o adjudicarse gratuitamente,

según esta Ley, salvo las excepciones, contenidas en el artículo siguiente.

Art. 12. No son enajenables:

1º Los terrenos baldíos cuya conservación sea conveniente por razones de utilidad pública, especialmente con el objeto de conservar o aumentar las fuentes y manantiales, los cuales se regirán por leyes especiales.

2º Los que se determinan para Egidios Municipales por esta misma Ley.

3º Los que el Ejecutivo Federal resolviera dejar para la colonización por medio de inmigrantes extranjeros o para la reducción de Indígenas en los Estados y Territorios en donde aún los hay incivilizados, adjudicándoles gratuitamente a cada familia que se establezca, cinco hectáreas con sólo el hecho de la Resolución respectiva que le servirá de título de propiedad.

4º Las tierras baldías que estén a inmediaciones de las Salinas hasta dos y medio kilómetros.

Art. 13. Los terrenos baldíos no comprendidos en las reservas del artículo anterior podrán:

1º Darse a Empresas ferrocarrileras según la ley respectiva.

2º Venderse a particulares o personas jurídicas para fines de agricultura o cría y adjudicarse gratuitamente a los labradores que los ocupen de acuerdo con las reglas de la presente Ley.

Art. 14. Los contratos que los Gobiernos de los Estados celebre, o los que el Ejecutivo Federal haga con el consentimiento expreso del respectivo Estado cuando se trate de terrenos de éstos, o sin dicho consentimiento, cuando se trate de Territorios Federales, para la explotación de maderas u otros productos naturales, no podrán abarcar más de cuarenta mil hectáreas de terreno, ni podrán ser de enfitéusis, ni envolver directa ni indirectamente el transferencia del dominio del terreno, ni podrán celebrarse en términos que impidan la enajenación a terceros de los terrenos a que se refieren, ni su ocupación por parte de los agricultores que quieran fundarse en ellos para obtener la adjudicación gratuita de los lotes que esta Ley permite darles.

Art. 15. El Ejecutivo Federal nombrará para cada Estado y Territorio Federal un Intendente de Tierras Bal-

días y Bosques, cuyas funciones además de las que le señalen otras leyes serán las siguientes:

1º Representar al Gobierno en todos los juicios que cursen o hayan de ventilarse en los Tribunales de su jurisdicción relativos a tierras baldías.

2º Formar y transmitir al Ministerio de Fomento con la mayor exactitud posible el catastro de las tierras baldías que existan en el respectivo Estado o Territorio, según las reglas del artículo 3º y las instrucciones que reciba del Ministerio de Fomento.

3º Dar aviso al mismo Ministerio de los casos que ocurran de terrenos baldíos que estuvieren indebidamente detenidos, sin ser ocupados por agricultores que pueden aspirar a adjudicaciones gratuitas según esta Ley.

4º Cumplir eficazmente las órdenes que reciba del Ministerio de Fomento.

5º Llenar los deberes que le impone la presente Ley.

CAPÍTULO III

De la renta de tierras baldías

Art. 16. Toda persona venezolana o extranjera en el goce de sus derechos civiles, puede comprar tierras baldías de acuerdo con las reglas de la presente Ley.

Art. 17. Los funcionarios públicos bajo cuya autoridad o intervención se hagan las enajenaciones de tierras baldías, no pueden adquirirlas directamente ni por medio de personas interpuestas, so pena de la nulidad que preceptúa el artículo 1.434 del Código Civil.

Art. 18. Los funcionarios a quienes comprende la prohibición del artículo anterior son:

1º El Presidente de la República, o quien haga sus veces y su Secretario.

2º El Ministro de Fomento y los Directores de su Despacho.

3º El Presidente del Estado o quien haga sus veces, el Gobernador del Distrito Federal y los de los Territorios Federales, sus Secretarios, los Intendentes de Tierras Baldías y los Procuradores Generales de los Estados, en cuanto a las tierras baldías de su respectiva jurisdicción.

Art. 19. Ningún Gobierno extranjero podrá adquirir tierras en Venezuela por ningún título ni motivo. La contro-

versión de este artículo producirá de pleno derecho y de modo absoluto la pérdida del dominio sobre el terreno de que se trata, el cual se considerará *ipso facto* como baldío y en tal concepto quedará sujeto a las disposiciones de esta Ley.

Art. 20. Toda persona que propone comprar tierras baldías, acepta desde luego y se entiende sometida por el sólo hecho de formalizar sus ofertas a las cláusulas siguientes:

1° Que compra a todo riesgo, sin poder reclamar en ningún tiempo saneamiento por la evicción que pudiere sufrir.

2° Que las dudas o controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse sobre el contrato de compra-venta a que aspira, y las cuestiones que acerca del terreno le sobrevinieren con cualesquiera personas, se decidirán única y exclusivamente por los Tribunales competentes de Venezuela de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo y por ninguna causa puedan ser origen de reclamaciones internacionales.

3° Que habiendo ocupantes en el terreno denunciado se somete en favor de éstos a los beneficios que le concede la presente Ley.

Art. 21. A ninguna persona jurídica ni natural se podrá vender en una sola concesión, tierras baldías sino hasta las extensiones siguientes como máximo:

1° Tierras agrícolas de primera clase, hasta cien hectáreas.

2° Tierras agrícolas de segunda clase, hasta doscientas hectáreas.

3° Tierras de cría de primera clase, hasta una legua.

4° Tierras de cría de segunda clase, hasta dos leguas.

§ 1° Sin embargo, siendo compañía anónima la que proponga la compra de mayor cantidad, el Ejecutivo del Estado si lo creyere conveniente para el País, puede convenir en ella.

§ 2° Al que haya cultivado la mitad de los terrenos agrícolas que se le hayan vendido, o haya fundado un hato en los de cría, podrá vendersele otro lote igual cuantas veces cumpliere y comprobare debidamente este requisito.

§ 3° En la venta o adjudicación de tierras baldías que estén situadas a orillas del mar, de lagos y ríos navegables

por buques de remo o vapor, cada porción habrá de tener, por lo menos una extensión diez veces mayor de fondo que la que se mida en la costa o ribera, cuando esto sea posible.

Art. 22. Son tierras agrícolas de primera clase, las que reúnan siquiera dos de las condiciones siguientes:

1° Ser de fácil riego o estar en lugares arbolados y lluviosos en que el riego sea prácticamente innecesario para la agricultura.

2° Estar a menos de cuarenta kilómetros de alguna línea ferrea, carretera, río navegable, costas del mar o ciudad importante.

3° Temperatura media de 25° centígrados. No podrá venderse a menos de cuarenta bolívares la hectárea.

Tierras agrícolas de segunda clase son las que no pueden clasificarse en primera y no podrá venderse a menos de veinticinco bolívares la hectárea.

Tierras pecuarias de primera clase son las que reúnan siquiera dos de las condiciones siguientes:

1° Ser sabanas de fertilidad natural y pastos pingües.

2° Estar en lugares no azotados por frecuentes sequías.

3° Situación a menos de cuarenta kilómetros de alguna línea ferrea o carretera, costas del mar o del Lago de Maracaibo, menos las del Sur de éste, ríos navegables o ciudad importante. No se venderá a menos de dos mil bolívares la legua.

Tierras pecuarias de segunda clase son las que no pueden clasificarse en primera. No se venderán a menos de mil doscientos bolívares la legua.

§ Las personas que tengan establecida una fundación agrícola con oficina o casa de habitación, y que esté produciendo por lo menos desde hace cinco años, tiene derecho a un 50 por ciento de rebajo.

Art. 23. El que aspirare a comprar un terreno baldío hará su proposición por medio de un escrito dirigido al Presidente del Estado en que esté situado, especificando clara y precisamente el lugar y municipio en que se halla el terreno los límites que lo determinen, clase en que el postulante lo crea comprendido según las reglas del artículo anterior: extensión solicitada, precio que ofrezca siempre que no baje del minimum res-



pectivo según las reglas del artículo anterior, compromiso de pagar este precio en Deuda Nacional Interna Consolidada de 3 por ciento anual, que se admitirá a la par, o en dinero efectivo equivalente al valor de dicha deuda según el tipo del último remate que se haya verificado, y en el plazo que fije esta Ley, manifestando someterse explícitamente a las condiciones del artículo 22.

§ Si pidiera mayor cantidad de terreno que la ordinaria, acompañará la autorización auténtica del Ministro de Fomento para promover la compra.

Art. 24. Al ser presentada la solicitud, el Secretario General del Presidente del Estado anotará al pie de la misma, bajo su firma y la del interesado, el día y hora de su presentación.

Art. 25. El Presidente del Estado mandará formar expediente y consultará por escrito al Intendente el mismo día, acerca de si el terreno es de los que pueden enagenarse, por no estar comprendido en las reservas del artículo 12. También pasará copia al Concejo Municipal respectivo para que si éste creyere que es de Egidos, pueda ordenar que su Síndico Procurador Municipal formule la oposición correspondiente.

Art. 26. El Intendente evacuará su informe a la mayor brevedad, y si fuere contrario a la solicitud, el Presidente del Estado, manifestando su opinión sobre el caso, consultará al Ministro de Fomento, quien decidirá si se continúa o no el procedimiento.

Art. 27. Caso de que el informe del Intendente sea favorable o que no siéndolo ordene el Ministro de Fomento, según el artículo anterior, la continuación del procedimiento, dispondrá el Presidente del Estado que se publique la solicitud y emplazará a todos los que se crean con derecho a oponerse.

Art. 28. La publicación se hará por tres veces insertándose íntegramente la petición en la *Gaceta Oficial* y en otro periódico de la localidad. Además se imprimirá en hojas sueltas.

Art. 29. Las hojas impresas de que trata la parte final del artículo anterior, serán enviadas al Jefe Civil del Municipio en número de doscientos ejemplares por lo menos; dicho funcionario hará colocar diez en los sitios más concu-

ridos de la cabecera y hará circular las demás, repartiéndolas entre los habitantes de su jurisdicción, haciendo luego constar en declaración jurada que extenderá ante el Juez del mismo Municipio, que ha cumplido con la fijación y circulación que ordena este artículo, remitiendo dicha acta original al Presidente del Estado.

Art. 30. Las publicaciones en la *Gaceta Oficial* y otro periódico, que ordena el artículo 28, se harán con intervalos de siete días por lo menos y todas deberán quedar hechas dentro de un mes a más tardar después de dictado el Decreto que ordene hacerlas.

Art. 31. Desde que se introduzca la solicitud del terreno hasta quince días después de la última de las publicaciones a que se refiere el artículo anterior, podrá cualquiera persona que crea tener derecho, formular oposición, de conformidad con el Capítulo VII siguiéndose según los casos los procedimientos que allí se pautan.

Art. 32. No ocurriendo oposición o si según lo que se decida en el procedimiento respectivo, caso de haberla, deben seguir las diligencias, ordenará el Presidente del Estado el levantamiento del plano por un Agrimensor titular, que él nombrará, y el avalúo y clasificación del terreno por medio de peritos.

Art. 33. Los peritos se nombrarán, uno por el Intendente de Tierras Baldías y otro por el postulante, y para el caso de discordia los mismos peritos nombrarán un tercero. Serán juramentados ante el Presidente del Estado o el funcionario que él comisione.

Art. 34. El Agrimensor nombrado prestará juramento ante el Presidente del Estado o empleado que él comisione, de llevar cumplidamente sus deberes, y proceder a levantar el plano topográfico que autorizará con su firma, en dos ejemplares, haciendo constar en él no sólo la situación, extensión y límites del terreno mensurado, sino también su calidad y demás circunstancias y accidentes, de modo que pueda juzgarse con exactitud respecto del valor y de la aplicación que deba dársele.

§ En la mensura se usará de la hectárea, conforme al sistema métrico, para los terrenos de labor, y de la legua cuadrada venezolana, con sujeción al mismo, teniendo por equivalente de di-

cha legua la extensión de un cuadrado de cinco kilómetros por cada lado o sean dos mil quinientas hectáreas, para los terrenos de cría.

Art. 35. Se agregarán al expediente: el informe del Intendente, según el artículo 26, un ejemplar de cada uno de los periódicos contentivos de las publicaciones hechas, uno de los dos ejemplares del plano, el acta de que trata el artículo 29 y las diligencias de avalúo.

Art. 36. Si el avalúo hecho por los peritos resultare superior al precio ofrecido por el proponente, éste deberá manifestar si lo acepta o si desiste de su proposición. En caso de que nada expusiere dentro de los diez días siguientes a la agregación al expediente de las diligencias sobre avalúo, se entiende que lo acepta y continuará su curso el asunto, y si expresamente retirare su solicitud se mandará a archivar lo actuado.

§ En este último caso cualquiera otra persona puede proponer la compra del terreno, aceptando las actuaciones y el precio dentro de tres meses, y continuará el procedimiento, utilizando todo lo hecho; pero el nuevo comprador pagará al proponente anterior los gastos que hubiere satisfecho. No tendrán ningún valor las diligencias practicadas, para una ulterior concesión que se pretendiere del mismo terreno.

Art. 37. Llenas las formalidades expuestas, el Presidente del Estado extenderá un informe sobre la conveniencia o inconveniencia de la venta y lo enviará junto con el expediente original al Ministro de Fomento, quien si no tuviere objeción ni reparo que hacerle, aprobará lo obrado y dispondrá, si el informe del Presidente del Estado fué favorable, que tan luego como el interesado haga la consignación del precio, se le extienda el título.

Art. 38. Este pago deberá efectuarlo el interesado en la forma indicada en esta Ley, en la Tesorería Nacional, dentro del improrrogable término de ciento veinte días a partir del Decreto del Ministro de Fomento a que se refiere el artículo anterior y hecho que sea, expedirá el mismo Ministro el título respectivo.

Art. 39. La no consignación del precio en el término dicho deja sin valor

todo lo actuado y no podrán servir después las mismas diligencias para extender el título de adjudicación en favor del mismo postulante ni de tercero, aunque ofrezca después consignar el precio.

Art. 40. El título de adjudicación expresará la situación, extensión y límites del terreno concedido, su calidad, y demás circunstancias convenientes para su precisa determinación, el nombre, apellido y domicilio del adquirente, el precio de la venta y que ésta se hace con las cláusulas que contiene el artículo 22 de la presente Ley.

§ El interesado hará registrar este título en la Oficina de Registro correspondiente para que surta todos sus efectos legales.

CAPÍTULO IV

De la adjudicación gratuita.

Art. 41. El ocupante de tierras baldías que posea en ellas cultivos hechos directamente por él y su familia, a sus propias expensas, esto es, sin haberlos llevado a cabo por medio de jornaleros, colonos ni aparceros, con casa de habitación en el mismo lugar, tiene derecho a que se le adjudique el terreno labrado, con agregación de otro tanto si lo hubiere desocupado y contiguo, pero de ningún modo podrá exceder de quince hectáreas la extensión de la concesión gratuita para un labrador.

Art. 42. De las tierras cuya propiedad se adquiera según el artículo anterior, quedan libres de toda ejecución dos hectáreas y la casa de habitación y por consiguiente no podrán ser embargadas ni rematadas mientras permanezcan en poder de su adquirente o de sus descendientes, ascendientes o cónyuge; pero ellos pueden voluntariamente venderlos o permutarlos. Esta condición debe quedar expresamente establecida en el título de la adjudicación.

Art. 43. Para obtener el beneficios que concede el artículo anterior, el ocupante ocurrirá ante el Presidente del Estado o Gobernador del Territorio donde se halle el terreno que labra, pidiendo la adjudicación y acompañando la prueba de las circunstancias exigidas por la Ley.

§ Esta prueba será por medio de in-

formación judicial en que declaren por lo menos tres testigos mayores de toda excepción, con citación del representante del Fisco del Estado o Territorio.

Art. 44. Siempre que varios labradores que estén en las circunstancias del artículo 41, ocupen un mismo lugar agrícola baldío, pueden reunirse en grupos hasta de diez a lo más, para promover las diligencias necesarias hasta obtener la concesión, colectiva del terreno que ocupan. Esta concesión no podrá exceder de tantas veces quince hectáreas cuantos sean los postulantes y no podrá hacerse si entre las labranzas de éstos existen otras de terceros.

Art. 45. Para obtener la concesión colectiva los postulantes constituirán un representante común que puede ser uno de ellos mismos, con facultades para representarlos en las diligencias de la adjudicación. El título definitivo se expedirá con especificación detallada de todos los interesados a cuyo favor se otorga.

Art. 46. Presentada la solicitud de adjudicación gratuita, se procederá como en el Capítulo anterior, con la diferencia de que no serán menester el avalúo del terreno y la consignación del precio, dada la naturaleza gratuita de la concesión y que las diligencias, como el título, se extenderán en papel común.

Art. 47. Sólo tendrán que satisfacer en estas diligencias el interesado o interesados, los honorarios del Agrimensor que se calcularán a razón de cuatro bolívars por hectárea.

Art. 48. Para los efectos del registro del título de adjudicación gratuita, se calculará el valor de cada hectárea en veinticinco bolívars cualquiera que sea su clase.

CAPÍTULO V

De los Egidos o Tierras Concejiles.

Art. 49. Son Egidos:

1º Los que en tal cualidad, bajo el mismo nombre o el de *Propios* han venido gozando las Municipalidades en cuyo favor existen concesiones anteriores a la presente Ley, cualquiera que sea su extensión.

2º Los que se conceden por esta Ley a los Municipios que no los tengan.

3º Las tierras que correspondían a los Resguardos de las Comunidades de Indígenas que se hayan extinguido por desaparición total de sus dueños.

Art. 50. Para los efectos del número 2 del artículo anterior se declara que pasan a ser Egidos de los Municipios existentes en la República y de los que en lo sucesivo se establecieren y cuya cabecera se hallare en terrenos baldíos, los que la circunden en extensión de diez mil hectáreas; es decir, cinco kilómetros a cada uno de los cuatro vientos principales de la población, desde el centro de ésta.

Art. 51. Cuando no hubiere por alguno de los vientos los cinco kilómetros que dice el artículo anterior se aumentarán por otros hasta llegar, si fuere posible, a las diez mil hectáreas expresadas.

Art. 52. El deslinde de los Egidos que establece el número 2 del artículo 49 se llevará a cabo de conformidad con las reglas del Código de Procedimiento Civil, sirviendo de título para promoverlo las disposiciones de esta misma Ley, que anteceden, en favor de los Municipios.

§ El representante de los Egidos para los efectos de este artículo es el Síndico Procurador Municipal del Distrito a que corresponda el Municipio respectivo y en los Territorios Federales su Gobernador.

Art. 53. Después de concluido el deslinde el Síndico Municipal ocurrirá con las actuaciones al Presidente del Estado o Gobernador del Territorio respectivo para que se expida el título de Egidos, el que se hará registrar con las actas del deslinde.

Art. 54. Cuando la cabecera de un Municipio que carezca de Egidos no estuviere situada en terrenos baldíos, pero los hubiere dentro de su jurisdicción y a menos de dos leguas de la cabecera, se le podrán dar de éstos, en la misma extensión si fuere posible de diez mil hectáreas. Pero en este caso no se considerará perfecta la concesión sino después que se hayan llenado las formalidades de los artículos que siguen:

Art. 55. El Jefe Civil del Municipio a excitación de la Junta Comunal se dirigirá por el órgano de su superior inmediato al Concejo Municipal de su Dis-

trito pidiendo que éste ordene iniciar el procedimiento de Ley para la obtención del terreno necesario, indicando sus linderos y acompañando un justificativo de testigos, de que es baldío y demás circunstancias que se creyere conveniente, evacuado ante el Juez del mismo Municipio.

Art. 56. El Concejo Municipal estudiará el asunto y si estimare que realmente el terreno es baldío dispondrá que el Síndico Procurador Municipal haga la petición formal ante el Presidente del Estado, acompañando todos los recaudos del caso.

Art. 57. Introducida la solicitud, el Presidente del Estado mandará publicar y formar expediente, siguiéndose hasta la expedición del título, las reglas del Capítulo III con las modificaciones siguientes:

1ª Como la concesión es gratuita, no será menester el avalúo del terreno que ordena el artículo 32 ni la consignación del precio que dispone el artículo 38.

2ª No será menester la consulta previa al Intendente sobre los particulares del artículo 25.

3ª Todas las diligencias serán en papel común.

4ª No se oirá en el expediente de concesión de Egidos ninguna oposición respecto de preferencia para la adjudicación, pero sí se dará curso a las que se formulen alegándose tener posesión legítima de los terrenos que en concepto de baldíos se han denunciado.

§ Estas oposiciones se decidirán conforme a lo que dispone el Capítulo VII.

Art. 58. Extendido el título hará protocolizarlo el Síndico Procurador Municipal en la Oficina de Registro correspondiente, con el cual quedará el Municipio a cuyo favor se otorgue, en pleno dominio y legítima posesión de los Egidos adjudicados.

Art. 59. Las Municipalidades legislarán acerca de sus Egidos y podrán concederlos a particulares según sus ordenanzas, y las leyes del Estado a que pertenezcan, pero no podrán dar, ni aun en arrendamiento, ni permitir ninguna explotación de los terrenos que deben quedar para bosques, para la conservación de fuentes y manantiales. Esta prohibición es también con respecto

a los Egidos o Propios provenientes de concesiones de la época colonial.

CAPÍTULO VI

Preferencias.

Art. 60. Tienen preferencia para que se les adjudiquen en sus casos las respectivas tierras baldías:

1º Los ocupantes que tengan derecho a solicitar su adjudicación gratuita según el artículo 41, cuando un tercero las proponga y ellos quieran hacer uso de su derecho de preferencia.

2º Las demás personas que no estando en el caso de poder obtener concesión gratuita, tengan ocupado algún terreno que solicite un tercero con establecimiento agrícola o pecuario y lo pidan en compra en las mismas condiciones que el tercero.

Art. 61. La preferencia se hará valer de conformidad con las reglas del Capítulo VII.

Art. 62. Los que estando en cualquiera de los casos del artículo 60 no hicieren siembargo uso de su derecho de preferencia para la adjudicación, tendrán en todo caso los beneficios siguientes:

1º No podrán ser inquietados por el adquiriente del terreno, quien no podrá exigirles desocupación ni cobrarles pisos, ni impedirles de modo alguno los trabajos que en sus labranzas sigan haciendo como acostumbraban, durante los cinco años siguientes al registro del título de su adquisición.

2º Vencidos los cinco años antedichos, si el propietario del suelo les pidiere la desocupación tienen derecho los ocupantes a optar entre verificarla o comprar al dueño la fracción del terreno que tengan ocupado.

3º Si optan por la compra, el dueño del suelo estará obligado a venderles el lote que labran y no podrán exigir precio mayor del doble de lo que resulte haber dado éla la Nación por esa fracción, calculándose proporcionalmente al precio total del terreno, determinado por el título de adjudicación.

4º Si optan por la desocupación, el propietario del suelo debe pagarles a elección de ellos, o el valor de los materiales y el precio de la mano de obra, por las construcciones, plantaciones y cualesquiera trabajos que tengan en el

fundo, o el aumento de valor, adquirido por éste en virtud de tales trabajos.

CAPÍTULO VII

De las oposiciones.

Art. 63. Las oposiciones se formalizarán en el lapso que indica el artículo 31, por escrito que se dirigirá al Presidente del Estado y sólo podrán fundarse en alguna de las causas siguientes:

1ª. Por alegar el opositor que está en posesión legítima de todo o parte del terreno que como baldío se ha denunciado.

2ª. Por alegar que tiene preferencia legal para que se le adjudique el terreno de que se trata, en todo o en parte, según las reglas del artículo 60.

3ª. Por alegar que el terreno que se solicita está comprendido en las reservas para bosques y conservación de aguas que hace el número 1º del artículo 12, cuando el opositor se sirve de las que nacen en el terreno denunciado.

Art. 64. Si la oposición se hace conforme al número 1º del artículo anterior, ordenará el Presidente del Estado que se publique en la *Gaceta Oficial* y hará notificarla al denunciante, el cual debe concurrir dentro de veinte días continuos después de notificado, sin término de distancia, al Despacho de la Presidencia a exponer lo que crea conveniente.

Art. 65. Si el denunciante concurre y retira su solicitud quedará concluido el asunto, caso de que la oposición versare sobre el todo.

Art. 66. Si conviniera en la oposición versando ésta sobre una parte del terreno, continuará el procedimiento de adjudicación por la parte restante.

Art. 67. Si no concurriera el denunciante se entenderá que contradice la oposición y tanto en este caso como en el de contradecirla expresamente, notificará el Presidente del Estado al Intendente de Tierras Baldías la oposición introducida y luego pasará copia de todo lo actuado al Juez de Primera Instancia en lo Civil en cuya jurisdicción esté el terreno discutido; pero cuando se haya hecho el catastro que previene esta Ley, y de él resulte claramente que el terreno no es baldío, el Presidente del Estado desechará la solicitud de compra.

Art. 68. El Juez mencionado dará entrada al expediente, entendiéndose de hecho abierta desde esa fecha una articulación por ocho días hábiles con más las distancias legales para que tanto el Intendente de Tierras Baldías, como el solicitante del terreno y el opositor, promuevan y hagan evacuar las pruebas legales que quieran presentar.

Vencido el lapso de la articulación relacionará el expediente y dictará sentencia.

Art. 69. En esta sentencia se limitará el Juez a determinar la posesión legítima de que habla el artículo 671 del Código Civil, expresando si el terreno en cuestión ha estado hasta el tiempo del denuncia en la tenencia del opositor por sí mismo o por otros que como arrendatarios o a otro título precario lo hayan tenido en su nombre, sin entrar a analizar los vicios que pueda afectar el título mismo del dominio en cuya virtud se ha ejercido tal oposición o bien si el terreno se ha venido ocupando y considerando como baldío.

Art. 70. Si el fallo decide la cuestión de la posesión legítima en favor del opositor, ordenará así mismo la cesación del procedimiento de adjudicación, si la oposición versare sobre el todo, o su continuación únicamente en cuanto a la parte restante, si versare sólo sobre una fracción.

Art. 71. Si decidiere en contra del opositor ordenará la continuación del procedimiento de adjudicación. En uno y otro caso, pasará copia de la sentencia al Presidente del Estado.

Art. 72. Contra este fallo se darán todos los recursos legales, como en los juicios interdictales, a cuya regla se ajustará el procedimiento, y por consiguiente la apelación se oirá en un sólo efecto; pero queda a salvo al opositor el derecho de intentar juicio ordinario de reivindicación si le fuere adverso y en caso contrario queda el mismo derecho a la Nación por medio del Intendente de Tierras Baldías, previa Resolución del Ministerio de Fomento.

Art. 73. Cuando la oposición versare sobre derecho de preferencia en la adjudicación, se seguirá el mismo procedimiento pautado en los artículos que anteceden. El fallo de la articulación será inapelable y declarará con o sin lugar la oposición, ordenando que conti-



núen las diligencias en favor de la parte por quien decida o de ambas si la oposición versare únicamente sobre preferencia en una fracción del terreno y se declare con lugar.

Art. 74. Si la oposición fuere de conformidad con el número 3 del artículo 63, el procedimiento será puramente administrativo. Introducida la oposición se notificarán al Intendente de tierras Baldías y al denunciante y mandará el Presidente del Estado practicar un reconocimiento del terreno por medio del Jefe Civil del Distrito respectivo.

Art. 75. Practicado dicho reconocimiento si alguna de las partes pidie término para hacer practicar una experticia, se concederá el suficiente para llevar a cabo ésta, juramentándose los expertos ante el Presidente del Estado o ante el funcionario que éste comisione.

Art. 76. Fuera de la experticia antedicha no se admitirá a las partes otra prueba que la del documento público, en el procedimiento administrativo a que se refieren los dos artículos anteriores.

Art. 77. Concluidas las diligencias, el Presidente del Estado fallará determinando si es o no menester la permanencia de los bosques para la conservación de la fuente o fuentes de que se trata. En caso afirmativo dispondrá que el terreno en cuestión quede reservado de enagenación y sujeto a las disposiciones sobre bosques y manantiales, mandando cesar en consecuencia las diligencias de adjudicación. En caso contrario mandará continuarlo y desechará la oposición.

Art. 78. En el primer caso previsto en el artículo anterior queda al peticionario del terreno la facultad de ocurrir dentro de un mes y la distancia, al Ministerio de Fomento, con copia de todo lo actuado que le dará al Presidente del Estado, para que el Ministro examine el caso y si lo cree de justicia puede revocar lo resuelto por el Presidente.

Art. 79. En el segundo caso del mismo artículo 77 el opositor puede ocurrir también al Ministerio de Fomento para que en la oportunidad del artículo 37 pueda este funcionario reveer la decisión del Presidente del Estado y

revocarla si no la creyere justa, negando la expedición del título de adjudicación.

CAPÍTULO VIII

Disposiciones generales.

Art. 80. Las atribuciones que da esta Ley a los Presidentes de los Estados, corresponden en el Distrito Federal y en los Territorios Federales a sus respectivos Gobernadores.

Art. 81. La propiedad de tierras baldías adquirida legítimamente hasta la fecha de la publicación de la presente Ley, queda firme y ratificada y no podrá ser objeto de reclamaciones por parte de la Nación ni de los Estados.

§ Lo dispuesto en este artículo no obsta a que respecto de las tierras concedidas en virtud de las Leyes y Decretos sobre Tierras Baldías de 1882, 1894, 1896, 1900 y 1904, si se averiguare que dentro de sus linderos se abarca mayor cantidad que la expresada en el Título respectivo pueda ejercer el Gobierno Nacional o el del Estado la acción que le da el último aparte del artículo 1447 del Código Civil, en los casos que no esté prescrita conforme a derecho.

Art. 82. Los contratos de arrendamiento de tierras baldías, hechos conforme a la Ley de 18 de abril de 1904, continuarán hasta el vencimiento de los cinco años estipulados en ellos, quedando desde luego excluida la tácita reconducción, que no podrán alegar en ningún tiempo los arrendatarios, quienes si no obtuvieren título de propiedad de acuerdo con el artículo que sigue, serán considerados después de los cinco años de sus contratos, como meros ocupantes.

Art. 83. Para adquirir la propiedad de las tierras baldías que tienen en arrendamiento, pueden ocurrir los interesados al Presidente del Estado o al Ministro de Fomento, según que el terreno pertenezca a un Estado o a un Territorio Federal, en escrito razonado al que acompañarán:

- 1º El título de arrendamiento.
- 2º El último recibo que demuestre que han satisfecho el canon anual estipulado.
- 3º Copia auténtica del plano que se

levantó en las diligencias del arrendamiento.

Art. 84. En su escrito expondrá el peticionario que se obliga a pagar de acuerdo con el artículo 23, el precio del terreno según el avalúo que se practique y que se somete a las cláusulas primera y segunda del artículo 20.

§ El interesado gozará de los beneficios otorgados por esta Ley en el párrafo del artículo 22.

Art. 85. Introducida la petición se mandará practicar el avalúo de conformidad con esta Ley.

Art. 86. Evacuadas dichas diligencias se procederá de conformidad con los artículos 37, 38, 39 y 49.

Art. 87. Todo título de adjudicación de tierras baldías se publicará en la *Gaceta Oficial*.

Art. 88. Mientras no haga el Ejecutivo Federal el nombramiento de los Intendentes de Tierras Baldías, ejercerán las funciones que a estos atribuye la presente Ley, los Procuradores Generales de los Estados.

Art. 89. Se deroga la Ley de 18 de abril de 1904 y cualquiera otra disposición contraria a la presente Ley.

Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los doce días del mes de agosto de 1909.—Año 100° de la Independencia y 51° de la Federación.

El Presidente,

(L. S.)

DIEGO BTA. FERRER.

El Vice-Presidente,

(L. S.)

ALEJANDRO RIVAS VÁZQUEZ.

Los Secretarios,

J. L. Andara.

R. Blanco-Fombona.

Palacio Federal en Caracas, a 13 de agosto de 1909.—Año 100° de la Independencia y 51° de la Federación.

Ejecútese y cuídese de su ejecución.

(L. S.)

J. V. GOMEZ.

Refrendado.

El Ministro de Fomento,

(L. S.)

R. M. CARABAÑO.

10.689

Decreto de 13 de agosto de 1909 por el que se aprueba en todas sus partes el contrato celebrado entre el Ministro de Relaciones Interiores y el ciudadano Andrés Rodríguez Azpúrua el día 30 de abril de 1908 para establecer una línea mixta de automóviles y de barcos en los raudales de Atures y Maipures.

EL CONGRESO

DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE VENEZUELA,

Decreta:

Unico. Se aprueba en todas sus partes el contrato celebrado entre el Ministro de Relaciones Interiores y el ciudadano Andrés Rodríguez Azpúrua, en treinta de abril de 1908, y que es del tenor siguiente:

“El Ministro de Relaciones Interiores de los Estados Unidos de Venezuela, suficientemente autorizado por el ciudadano Presidente Constitucional de la República, por una parte, y por la otra Andrés Rodríguez Azpúrua, venezolano y mayor de edad, han convenido en celebrar el siguiente contrato:

Artículo primero:

Andrés Rodríguez Azpúrua, que en adelante se llamará el Contratista, se compromete a establecer en el término de dos años, una línea mixta de automóviles a petróleo o gasolina y barcos a vapor que pueden ser remolcadores, para hacer el servicio público de transporte de carga y pasajeros por las márgenes de los grandes raudales del Orinoco, llamados de Atures y Maipures, y por los afluentes y subafluentes del mismo río, accesibles a dicha navegación y comprendidos en el Territorio Federal Amazonas.

Artículo segundo:

El presente contrato, cuya duración es de veinticinco años (25), implica para el Contratista, entre otras que más abajo se dirán, las siguientes obligaciones:

1ª Establecer una primera línea de locomoción de automóviles, que salve del uno al otro extremo los grandes raudales de Atures, y tenga principio en el Puerto de Pericos sobre el Orinoco, límite máximo de su actual navegación a vapor: